

SINTESIS DE LOS HECHOS SEMANALES (11-18 de Octubre)



En esta semana se cumplía el primer aniversario del 15 de Octubre de 1979, que en la propaganda oficial aparecía nombrado como "movimiento insurreccional". Se quiso mostrar en el festejo que se hizo en la Maestranza y en el propio discurso de Duarte, que el movimiento insurreccional fue cosa del Coronel Gutiérrez, auxiliado por García, Carranza y Castillo. Cosa completamente falsa aunque con alguna apariencia de verdad. Desde luego el Coronel Majano no asistió a la mascarada. Al contrario en su discurso conmemorativo volvió a reiterar que no se habían alcanzado las metas del 15 de Octubre, que no se había avanzado en la reforma política y que se veían grandes dificultades en el proyecto actual para que pudiera llegar a ser el proyecto que realmente necesita el país. Una vez más y tras la grave crisis militar de Septiembre se ha vuelto a comprobar que ni siquiera en la Junta de Gobierno y en la Fuerza Armada hay unanimidad. Al contrario, hay profundas divergencias.

No es que los otros miembros de la Junta no apreciaran que las cosas van mal y que la solución del 15 de Octubre está lejos de haber resuelto los problemas. En ese sentido, si no el discurso de Duarte, al ~~menos~~ menos el decreto que leyó es prueba manifiesta de que la Junta reconoce la existencia de la represión y de la violación de los derechos humanos y de que la Junta atribuye en mayor o menor grado responsabilidad por la represión y la violación de los derechos humanos a la Fuerza Armada y a los Cuerpos de Seguridad. Llámese a esto abuso del poder o permisividad negligente es claro que el decreto en cuestión, en que se pretende responsabilizar a los jefes militares de los abusos cometidos, es un claro reconocimiento de que se cometen esos abusos. Un ejemplo claro de ello lo tiene el propio Duarte con el asesinato del dirigente demócrata cristiano Melvi Orellana. Se hizo creer en ~~un~~ un primer momento que era un asesinato cometido por las FPL; hoy se sabe que no han sido las FPL quienes le asesinaron. ¿Quién entonces? Pocas dudas caben de que con toda probabilidad ha sido la derecha y una

derecha incrustada en la Fuerza Armada y en el propio Gobierno. ¿Cómo debiendo saber esto el Ingeniero Duarte acusa a las extremas de la crisis del país, cuando en realidad sólo hay dos grupos a uno de los cuales él pertenece? Las alabanzas indiscriminadas de Duarte a la FA y sus ataques indiscriminados a la izquierda le sitúan en una mala posición para el futuro. Su posición es excluyente, pero excluyente de la izquierda, sin la que no se puede gobernar en este país.

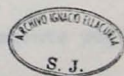
Fue el Coronel Gutierrez el que ofreció las soluciones que Estados Unidos y parte de la Junta tienen para la situación del país. La más importante el anuncio de una Asamblea Constituyente para 1982 que de paso a un gobierno elegido; se trata de una medida con buena venta internacional pero del todo insatisfactoria e insuficiente para resolver la actual crisis. ¿Cómo creer en elecciones tantas veces burladas en este país? Y aunque hubiera elecciones libres, ¿quién o qué asegura en El Salvador que se aceptarían los resultados, teniendo en cuenta la actitud de los actuales jefes militares y lo que acaba de ocurrir en Bolivia? Un Ejército como el actual, con la organización y los mandos actuales no son garantía alguna de elecciones. El problema no está en un nuevo Consejo Central de Elecciones sino en unas condiciones reales de actividad política, que hoy no las hay por el Estado de Sitio y por la represión permanente, y en una reestructuración del Ejército. Ambas cosas parecen imposibles hoy por hoy. La oferta de la reapertura de la Universidad Nacional no fue clara y habrá que ver cuándo y cómo se lleva a cabo. La amnistía ofrecida es ridícula, pues no pone en libertad a ninguno de los presos políticos sino que se reduce a invitar a los jóvenes guerrilleros a que abandonen la guerrilla ofreciéndoles seguridades, como si las pudieran dar. ¿O es que los crímenes represivos actuales podrían ser impedidos por los actuales gobernantes? Y si pueden ser impedidos, ¿por qué no lo hacen?



Después de un año es preciso confesar que las cosas están peor que en los últimos días de Romero. La represión es mucho mayor, la violación de los derechos hu-

manos mucho más intensa, la crisis económica todavía más grave, la crisis social mucho más extrema. Se han emprendido reformas pero quienes las han emprendido y el modo en que han sido llevadas a cabo no han logrado nada positivo en la pacificación, democratización y humanización del proceso. Números conservadores hablan de ocho mil víctimas bajo el mandato de la Junta cívico-militar y la presencia política de la Democracia Cristiana o lo que queda de ella, una vez que se ha retirado también el Secretario general del Partido y ha sido asesinado uno de sus dirigentes.

La verdad es que después de un año estamos en plena guerra. En Morazán están en batalla más de tres mil quinientos efectivos de la Fuerza Armada con tanquetas, helicópteros y armas pesadas contra un número no determinado de fuerzas insurgentes, a las que todavía no han podido reducir. La Cruz Roja habla de cincuenta mil refugidos que huyen de la zona de guerra. Si juntamos a estos los que huyen de la represión, no es exagerado hablar de más de cien mil salvadoreños refugiados, fuera de las decenas de miles que han huido del país. La situación empeora por momentos y cada vez es más claro que el actual proyecto de la Junta y de los Estados Unidos no tiene salida democrática alguna. Esta es también la impresión de una gran parte de Gobiernos occidentales, de la Internacional Socialista y empieza a serlo también de la Democracia Cristiana europea.



En este contexto la mediación ofrecida por la Conferencia Episcopal salvadoreña tiene un punto positivo, el de admitir que hay dos bandos en conflicto y que los dos deben ser tomados en pie de igualdad. Ya no son unos guerrilleros comunistas que se han levantado contra un Gobierno democrático, legítimamente constituido, sino que se trata de una división profunda del país, de dos proyectos nacionales, uno nacido del pueblo y otro nacido de la Fuerza Armada, desviada de sus propósitos del 15 de Octubre. El punto ilusorio de su propuesta es doble: entre esos dos extremos no hay mediación posible, pues ninguno de ellos la quiere y, además, la Conferencia episcopal por múltiples razones no ofrece garantía, después de su historial, a los representantes del

proyecto popular. El Gobierno y la FA no aceptan mediación porque se consideran los únicos representantes legítimos de la voluntad popular; la izquierda no la acepta porque no puede sentarse a una mesa con los responsables últimos de la represión, presidida por unos Obispos que ni siquiera lograron entender la posición de Monseñor Romero.

No es que la izquierda se cierre. Ha hecho un gran esfuerzo de apertura con los sectores democráticos y ha logrado aglutinar en torno a sí a una gran parte de las fuerzas políticas y sociales, cosa que no ha logrado el actual Gobierno, a quien casi sólo la UCS le presta un apoyo reticente y en algunos casos, como en la disputa de Septiembre, ~~reticente~~ ^{condicionado}. La izquierda sigue con su propósito de diálogo con parte de la Iglesia, con parte de la FA, con las clases medias, con la pequeña y mediana empresa, con todos los regímenes democráticos del mundo. Acusarla de intransigencia es quererle engañar. Si no quiere hablar con la actual Junta oficialmente le asisten todas las razones morales del mundo para no hacerlo. Y no lo harán. La mediación, si ha de haberla, ha de entenderse de otro modo: con otros interlocutores y con otros mediadores.



En todo este negro horizonte esta semana ha surgido el fogonazo brillante de un pronto tratado de paz con Honduras. La cosa en sí es extraordinariamente positiva, a reserva de conocer los términos exactos del Tratado. Si se hubiese logrado en otro momento, podría considerarse como algo casi suficiente para legitimar la acción de un Gobierno. Hoy, sin embargo, este brillante logro está empañado por una serie de sospechas. ¿Se ha debido a presiones de los Estados Unidos para que los guerrilleros no encuentren respaldo en la frontera hondureña? ¿Se ha debido a que esto posibilita la colaboración de los ejércitos de Honduras y El Salvador en el intento de aniquilar el ejército popular? Los hechos darán o quitarán razón y verdad a estos interrogantes. De momento no hay explicación para el arreglo sin la intervención directa de los Estados Unidos y ya sabemos lo que los Estados Unidos quieren para nuestro país en las actuales circunstancias. 18-19 Oct., 1980